



Superintendencia de Notariado y Registro



LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

CERTIFICA:

De conformidad con lo señalado en la Resolución 02846 de 2023, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial en sesión ordinaria realizada el veinticuatro (24) de septiembre de 2024, procedió a estudiar la viabilidad de presentar o aceptar fórmula de acuerdo dentro de conciliación judicial promovida por PIEDAD MAGALI CORTES ORTIZ contra la Superintendencia de Notariado y Registro [SNR]; el Comité de Conciliación en aras de definir si es viable proponer fórmula conciliatoria, profiere la siguiente

DECISIÓN:

Analizada la posición del apoderado de la entidad y una vez estudiados los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos del presente caso, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial ha encontrado ajustada la posición de NO CONCILIAR en la audiencia de conciliación referida, bajo los siguientes argumentos:

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA (MATERIAL) DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR) RESPECTO A LA CONDUCTA DE LOS NOTARIOS

La Superintendencia de Notariado y Registro contempla sus funciones dentro del Decreto 2723 de 2014. Sus funciones principales radican en la inspección, vigilancia y control de las Notarías, a lo cual se enmarcan facultades de orientación, realización de visitas, fijación de estándares de calidad, entre otras que se encuentran dentro del art. 11 del mismo Decreto. De esta forma, toda acción u omisión que realice la Superintendencia se le atribuye en las funciones propias que ya han sido mencionadas, pero en casos propios de las Notarías es primordial hacer un análisis de mayor profundidad.

El Consejo de Estado a lo largo de los años ha establecido una jurisprudencia respecto a la responsabilidad que tiene la Superintendencia de Notariado y registro frente a la prestación del servicio notarial. De esta ha establecido que los daños que se causen derivados a los hechos de los notarios no le corresponden a la Superintendencia y ha consolidado dos estándares para el análisis de responsabilidad que se puede causar¹:

1. la responsabilidad que se puede derivar del ejercicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de competencia de la Superintendencia, único supuesto en el cual se podría considerar responsable a la entidad; y, 2 los derivados de la conducta autónoma, activa u omisiva, de los notarios, en la cual no se podría predicar una responsabilidad directa, que no resultan imputables, fáctica o jurídicamente a la entidad. Dando énfasis a estos criterios, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 2002, revocó una sentencia en la cual el fallador de primera instancia había declarado la responsabilidad de la entidad, por un caso en el que un notario omitió tomar la huella del otorgante de un poder, lo cual derivó en la ocurrencia del delito de estafa y al respecto señaló:

“Para la Sala no tiene duda que son de recibo las apreciaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro dentro del proceso y especialmente en el memorial de apelación, en cuanto a que ella no es la autoridad que debe responder patrimonialmente por las irregularidades en que incurren los notarios en la función pública de notariado y registro.

(...)Partiendo del marco jurídico visto y de la jurisprudencia y la doctrina como auxiliares en la administración de justicia se verá en primer lugar y como lo dijo la Superintendencia de Notariado y Registro, que el derecho y las pruebas son indicadores de que la irregularidad en que incurrió el notario, no tomar la huella dactilar del índice derecho de los comparecientes, es una falencia que no le es imputable a la mencionada Superintendencia y, en segundo lugar, que esa irregularidad sólo es predicable de otra persona jurídica como es la Nación, falencia que por sí sola no es conclusiva de responsabilidad porque como lo ha indicado la Sala en varias oportunidades la prueba de la falla no es al mismo tiempo prueba del nexo adecuado de causalidad. Por ello en el capítulo de daño y nexo de causalidad se estudiará si como lo concluyó el a quo tal falencia fue la causa eficiente y determinante en la causación del daño.

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de julio de 2014, Exp. 26580



Superintendencia de Notariado y Registro

(...) PARA EL CONSEJO DE ESTADO ESAS PRUEBAS SON CONCLUYENTES de la existencia real de la irregularidad afirmada definitivamente en la demanda, pretensión primera, atinente a **que la falencia ocurrió con ocasión de la prestación del servicio de notariado que está a cargo de la Nación Colombiana como ya se explicó, legislativa y ontológicamente.** (...)

Tal situación omisiva es predicable de la Nación (Colombiana) que es la persona de derecho público que en ese momento en vigencia de la Constitución de 1886 - al igual que ahora, cuando rige la Carta Política de 1991 - tenía a su cargo el servicio de Notariado; **y no es predicable de la Superintendencia de Notariado y Registro que tiene a su cargo, entre otros, las funciones de inspección y vigilancia de los notarios.**

La primera de aquellas conclusiones, que el servicio de notariado pertenece a la Nación no desconoce las disposiciones jurídicas que predicen la responsabilidad del notario (dcto ley 960 de 1979, arts. 195 a 197), sino que se armonizan e integran con otras que aluden a que dicho servicio corresponde a la Nación, persona que delega ese servicio - función pública en los notarios. Por todo esto es que puede demandarse la responsabilidad de la Nación o conjuntamente la de ésta y la del notario; y luego si sólo se demanda a la Nación ésta, según [el] decreto 2.148 de 1983 (art. 120) puede repetir contra el notario para demostrar en juicio el dolo o la culpa grave del mismo.

Igualmente, se concluye que la Superintendencia de Notariado y Registro no está legitimada materialmente en la causa en cuanto a las imputaciones directas que se le hicieron por irregularidad en el servicio de notariado en que incurrió el notario². (énfasis añadido) .

Ya en el ámbito de la jurisprudencia desarrollada por las Subsecciones de la Sección Tercera, se tiene, por ejemplo, que, en sentencia de 2011, en un caso relativo a la indebida identificación de la compareciente a un contrato de compraventa de bien inmueble, la Subsección C reiteró la jurisprudencia señalada y al respecto consideró:

“[En síntesis, la jurisprudencia del Consejo de Estado es unánime y pacífica al determinar que las actuaciones u omisiones de los particulares que ejercen función pública puede comprometer la responsabilidad del Estado, esto es de la Nación Colombiana.

En este caso, la Sala reiterará la jurisprudencia que sobre el tema ha edificado la Corporación, con la aclaración de que en los eventos en los cuales se pretenda declarar la responsabilidad del Estado por la falla del servicio notarial, resulta indispensable llamara a la Nación representada a través del Notario.

(...) **Comoquiera que en este caso se demandó únicamente a la Superintendencia de Notariado y Registro, por la falla del notario, hay lugar a declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la imputación fáctica y jurídica de la demanda no permite deducir que se hubiere demandado por la falla en la inspección, control y vigilancia del servicio notarial, sino directamente por la falla del notario**”]. (énfasis añadido).

En 2012, la misma Subsección C reiteró su postura en un caso relativo a múltiples irregularidades vertidas en el proceso de extensión y autorización de unas escrituras públicas, se afirmó que **“la Superintendencia deberá responder administrativamente, únicamente, siempre que y solo cuando la falla devenga del incumplimiento o cumplimiento negligente del ejercicio de las funciones de vigilancia y control atribuidas por la Ley a dicho órgano.**

Por su parte, la Subsección A, en sentencia de 2014, en un caso relativo a un delito cometido por un notario, que generó perjuicios a unos ciudadanos concluyó:

“[De esta manera, sin que sea necesario reiterar la evolución legislativa y jurisprudencial que se ha decantado en la materia, en cuanto a la legitimación en la causa se refiere, resulta necesario precisar que: i) al tratarse de un servicio público; ii) cuya titularidad corresponde a la Nación³, la cual a través de sus diferentes autoridades (Ministerio de Justicia), de entidades descentralizadas de distinto orden y naturaleza (Superintendencia de Notariado y Registrado, Entidades Territoriales) y de particulares que cumplen funciones públicas (notarios) lo ejercen, reglamentan, inspeccionan, vigilan y controlan su ejercicio; iii) su ejercicio puede comprometer la responsabilidad de patrimonial de las personas públicas por distintas razones y títulos jurídicos, así dependiendo de las distintas actuaciones que se enmarcan en el ejercicio del servicio público y de la función notarial, las diferentes autoridades intervinientes en dicho proceso responderán por el ámbito de competencia que les haya

² Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de agosto de 2002, Exp. 13248, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

³ En los términos del artículo 131 C.P., con los lineamientos que al respecto ha decantado la jurisprudencia ya citada de esta Corporación.



Superintendencia de Notariado y Registro

sido atribuido por el ordenamiento jurídico; sin embargo, **iv) la Superintendencia de Notariado y Registro, por ser una entidad descentralizada del orden nacional, por ende dotada de personería jurídica, no debe responder directamente por la conducta de los notarios, sino por el incumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido –esto es, de manera general, la inspección, vigilancia y control de la actividad notarial–.**

Ahora bien, en criterio de la Sala en los casos en que se cuestione la responsabilidad del Estado por las conductas de los notarios que hubieren causado un daño antijurídico con ocasión del ejercicio de las funciones que el ordenamiento jurídico les ha atribuido, no resulta dable acudir, como alguna jurisprudencia lo pudo insinuar, a la fórmula “Nación-Notario” con el fin de configurar la parte demandada sino que se debe demandar en representación de la persona jurídica Nación al Ministerio de Justicia y del Derecho, estructura administrativa que tiene a su cargo la reglamentación y gestión del servicio notarial cuya titularidad se ha radicado en la Nación, esta postura se encuentra plenamente sustentada en los siguientes argumentos:

“i) Los notarios, a pesar de encontrarse plenamente habilitados para el ejercicio de la función fedante, no tienen dentro de sus competencias la de representar judicialmente a la Nación;

“ii) En relación con lo anterior, si bien es cierto que la conducta de los notarios puede comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, tal y como lo ha reconocido en la jurisprudencia ya transcrita y consolidada, no lo es menos que, desde el punto de vista procesal, los notarios no tienen la capacidad de comprometer el presupuesto de la Nación;

“iii) Si se tiene en cuenta que la responsabilidad del Estado es de carácter anónimo, institucional, el hecho de que se pueda demandar directamente la conducta de los notarios y que se les permita responder autónomamente en los procesos de reparación directa, puede tener la virtud de desnaturalizar esta elemental característica, al confundirse la responsabilidad patrimonial del Estado con la personal de los notarios; y,

“iv) En virtud de la regla general contenida en el artículo 86 C.C.A., y la especial del artículo 120 del Decreto 2148 de 1983⁴, la Nación deberá, si se configuran las condiciones para ello, repetir contra el notario cuya conducta causó la declaratoria de responsabilidad y la consecuente imposición de la condena]⁵.

Posteriormente, en sentencia de 2017, la Subsección B reiteró la imposibilidad de imputar a la Superintendencia de Notariado y Registro los hechos de los notarios, en un caso en el cual la Fiscalía General de la Nación ordenó la cancelación de unas anotaciones; al respecto se señaló:

“[3.2. En relación con la responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro por el hecho de los notarios, se ha dicho en la jurisprudencia de la Sección que esta se genera cuando la entidad omite ejercer sus funciones de vigilancia y control, como ocurre en aquellos eventos en los se tenga conocimiento de que los notarios están incurriendo en irregularidades y, sin embargo, la entidad se abstenga de adelantar las investigaciones, imponer las sanciones y aplicar los correctivos a que haya lugar, dentro del marco de sus competencias; pero no habrá lugar a derivar esa responsabilidad cuando los daños se originan en las fallas en el ejercicio de la función propiamente notarial, dado que no está dentro de las funciones de la entidad, conforme a lo establecido en el Decreto 1260 de 1970, refrendar el otorgamiento de instrumentos públicos, revisar los documentos que los otorgantes allegan a las notarias para la protocolización de los actos o contratos, o tomar las huellas dactilares de los comparecientes]”. (énfasis añadido)⁶.

Así, la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno a este punto ha reconocido la procedencia de acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pretendiendo que se declare la responsabilidad del Estado por la falla del servicio notarial, sin embargo, **ha considerado de manera sistemática, consistente y coherente que reconoce que la imputación fáctica o jurídica de un daño a la Superintendencia de Notariado y Registro se requiere la omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, es decir aquellas que le han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico en el marco del principio de especialidad de las entidades públicas y no, genéricamente, por cualquier daño producido por la conducta de los notarios.**

Es claro entonces que las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Notariado y Registro, son incompatibles con la asunción de responsabilidad directa por la conducta de los notarios.

⁴ A cuyo tenor, “[e]n los casos en que la Nación sea condenada por falla en la prestación del servicio notarial, podrá ejercitar la acción de repetición correspondiente”.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de julio de 2014, Exp. 26580.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017, Exp. 39849.



Superintendencia de Notariado y Registro

En este orden de ideas, la única conclusión plausible, en el marco del ordenamiento jurídico nacional es que, en el marco de la prestación del servicio notarial, la Superintendencia de Notariado y Registro, solo podrá ser responsable por la omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, pero no podrá serlo de manera directa respecto de sus conductas pues: *i)* la Superintendencia de Notariado y Registro, no actúa como superior jerárquica o funcional de los notarios; *ii)* a diferencia de lo que ocurre con el servicio registral, el servicio notarial no lo presta la Superintendencia de Notariado y Registro; *iii)* la relación entre los notarios y la Superintendencia de Notariado y Registro, es de estricta intervención en el marco de una actividad regulada en la Ley, razón por la cual no se podría enmarcar en alguno de los supuestos de posición de garante; y, finalmente, *iv)* las obligaciones derivadas de las funciones de inspección, vigilancia y control son obligaciones de medio y no de resultado.

Conforme lo expuesto, debe señalarse con firmeza que, de acuerdo con la solicitud de conciliación, desde esta perspectiva no se advierte que la Superintendencia de Notariado y Registro tenga legitimación en la causa por pasiva por cuanto la presunta inobservancia por parte de la Notaría Quinta del Círculo de Neiva, no guarda relación con las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Notariado.

Igualmente, la parte convocante no demuestra, ni acredita que la convocada tenga legitimación en la causa por pasiva o relación causal con aquellos hechos en los que asegura se configuran los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y suplantación, pues como se evidencia en la solicitud y sus anexos, ni siquiera existe una sentencia judicial proferida por el Juez Penal que pruebe dichas acusaciones.

Por lo demás, se ratifica así que la entidad convocada no está omitiendo ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control, por cuanto si se observa con atención la normatividad, la no práctica de la biometría en los procesos fedatarios tampoco se constituye como una falta normativa y, por ende, no hay lugar si quiera a contemplar una eventual responsabilidad por parte de esta Superintendencia.

II). EN LA SOLICITUD NO SE ACREDITA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 CONSTITUCIONAL.

Dada la naturaleza de las funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico a la Superintendencia de Notariado y Registro, la conducta de los notarios solo puede comprometer su responsabilidad en caso de que se logre acreditar la ocurrencia de una falla en el servicio, la cual se rige, además, por el principio de relatividad.

La doctrina y la jurisprudencia han definido la falla del servicio a partir de sus elementos, sin embargo, es difícil encontrar un concepto realmente satisfactorio de la falla del servicio. Se trata de una definición de “[*contornos imprecisos y susceptibles de múltiples apreciaciones*]”⁷.

Para Juan Carlos Henao, por ejemplo, “[*la falla del servicio es la violación de un contenido obligatorio a cargo del Estado*]”⁸. Desde un punto de vista más tradicional, se puede afirmar que “[*se configura por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la Administración Pública*]”⁹.

El Consejo de Estado¹⁰, en reiterada jurisprudencia se han señalado, con distintas formulaciones, los mismos elementos de este régimen de responsabilidad. Así, por ejemplo, en sentencia del 20 de noviembre de 2017, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: “[*es necesario contrastar el contenido obligatorio que rige la función de la autoridad pública demandada con el grado de cumplimiento de la misma, para en caso de encontrar una actitud omisiva, proceder a declarar la responsabilidad del Estado*]”¹¹. Ello implica la realización

⁷ Pablo E. Perrino, *La responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos*, Ed. Thomson Reuters – La Ley, 2015, Buenos Aires, p. 90 a 91.

⁸ Juan Carlos Henao, “La noción de falla del servicio como violación de un contenido obligatorio de una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés”, AAVV, *Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos*, T. II, Bogotá, U. Externado, 2003.

⁹ Pablo E. Perrino, *La responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos*, Ed. Thomson Reuters – La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 91.

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 27434.

¹¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de noviembre de 2017, Exp. 37356. También se ha afirmado, que “[*e*]n casos de responsabilidad extracontractual por omisión estatal, dicho juicio se fundamenta en el presupuesto de la imputación, consistente en la comprobación de un deber jurídico a cargo de la entidad demandada que tiene la competencia de evitar el resultado lesivo y, pese a ello, se abstiene voluntariamente de ejercer oportuna y



Superintendencia de Notariado y Registro

de “una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que incurrió la Administración y que implica un consecuente juicio de reproche”¹².

De esta manera, queda claro, en el caso de la falla del servicio, la responsabilidad se deriva del incumplimiento del contenido obligacional del Estado, en virtud del cual se configura un daño antijurídico a un particular, sin que se haya verificado la ocurrencia de alguna causal eximente de responsabilidad. En este sentido, para que pueda proceder la condena contra la Superintendencia de Notariado y Registro por el hecho de los notarios, se requiere acreditar la violación de un contenido obligacional concreto a cargo de la entidad, es decir que, en el caso concreto la omisión en el cumplimiento de las funciones incidió en la producción del daño, es decir que de haber actuado habría podido evitar el daño. Ahora bien, es sabido que el incumplimiento por sí solo del contenido obligacional del Estado no compromete su responsabilidad, pues la falla del servicio es un concepto relativo que se debe analizar en cada caso concreto, según la capacidad real de intervenir del Estado.

En tal virtud, la jurisprudencia del Consejo de Estado creó la teoría de la “falla relativa del servicio”, cuya formulación se encuentra en una sentencia relativamente reciente, en la que se afirmó que este principio “... **[evita que la responsabilidad de la administración, cimentada en el título de imputación subjetivo o común – denominado ‘falla en el servicio’- torne las obligaciones del Estado, ya sean las derivadas de manera explícita de una norma constitucional, legal, o reglamentaria, o del principio establecido en el artículo 2º de la Constitución Política, en obligaciones de resultado]**” (énfasis añadido)¹³.

Por lo tanto, la señora juez de la causa debe analizar “[de manera integral las pruebas, a efectos de establecer las circunstancias y el contexto que rodeó los hechos]”, para determinar si una conducta distinta era razonablemente esperable de la administración pública, según los medios que tenía a disposición o que debió tener, entonces “[el juez toma en consideración los medios con los cuales dispone el servicio para hacer frente al contenido obligacional que lo vincula]”¹⁴. Es decir, se pretende determinar si la entidad demandada estaba en capacidad de evitar la producción del daño, pues, se reitera, es principio general del derecho que nadie, ni siquiera el Estado, está obligado a lo imposible.

Por lo tanto, solo en la medida en que la Superintendencia de Notariado y Registro tuviere conocimiento previo de la conducta del notario quinto de Neiva, existieren denuncias reiteradas, o un historial que permitiera prever la ocurrencia de una situación que ameritara la actuación previa de la entidad en ejercicio de sus funciones, podría eventualmente considerarse la evaluación de una posible relatividad de la falla del servicio.

III). INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL

Téngase en cuenta que para que se predique la responsabilidad patrimonial de la entidad y haya lugar a la indemnización de perjuicios, el convocante debe acreditar de forma clara y certera que realmente ocurrió un daño antijurídico imputable al ente público. Desde el punto de vista conceptual, para concluir la ocurrencia de un daño antijurídico imputable a quien acusa, el interesado deberá demostrar: (i) la ocurrencia de un daño antijurídico; (ii) la acción, omisión o extralimitación de la autoridad pública acusada (título de imputación); (iii) el nexo causal entre el daño antijurídico reclamado y la conducta de la autoridad.

IV). HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO.

Dado que no existe falla en el servicio imputable a la Superintendencia de Notariado y Registro ya que esta no intervino en ninguna de las actuaciones que sirvieron como sustento fáctico de la conciliación, resulta injusto y arbitrario atribuirle responsabilidad administrativa y patrimonial por presuntas actuaciones delictuosas desplegadas por terceros, los cuales se valieron de medios fraudulentos para obtener un beneficio económico en detrimento del patrimonio de los demandantes, el cual de llegar a acreditarse debe ser atribuido a aquellos cuya responsabilidad penal se llegue a demostrar por parte de la autoridad competente.

eficientemente un estándar funcional de diligencia debida, lo que incide directamente en la producción del daño antijurídico”, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2014, Exp. 31190.

¹² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de mayo de 2013, Exp. 26020. Ver, también, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2011, Exp. 20306.

¹³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 24631, C.P. Gil Botero.

¹⁴ Juan Carlos Henao, “La noción de falla del servicio como violación de un contenido obligacional de una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés”, AAVV, *Estudios de derecho civil. Obligaciones y contratos*, T. II, Bogotá, U. Externado, 2003, p. 91 a 92.



Superintendencia de Notariado y Registro

Al respecto, es preciso destacar que el hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, se da ante la intervención exclusiva de un agente jurídicamente ajeno al demandado en la producción de un daño. Para que el hecho de un tercero tenga poder exoneratorio tal conducta debe reunir las mismas características de imprevisibilidad e irresistibilidad que se requieren para la fuerza mayor y el caso fortuito. Asimismo, la intervención del tercero debe ser esencial para la producción del perjuicio.

Es decir, que se requiere que el hecho haya sido causado por cualquier persona que carezca de relación de dependencia jurídica con el demandado y por la cual éste no tiene obligación de responder, como sucede en el presente caso.

De otro lado, el hecho debe ser irresistible, o sea, debe tener la entidad suficiente para poner a la convocante, a pesar de sus mayores esfuerzos, en imposibilidad de evitar el daño.

Adicionalmente el hecho debe ser imprevisto, es decir, que debe tratarse de un evento de un carácter tan remotamente probable y súbito que ni siquiera una persona diligente hubiera razonablemente tomado medidas para precaverlo, y la conducta del tercero debe desempeñar un papel exclusivo o esencial en la producción del daño.

Para el estudio de la presente ficha se hizo uso de la directriz 01 de 2021 de conciliación en relación con el hecho de un tercero como factor determinante en la producción del daño: relacionada con la PRESTACION INADECUADA DEL SERVICIO NOTARIAL, en la cual se planteó la siguiente tesis:

"[La Superintendencia de Notariado y Registro NO está llamada a responder por las presuntas fallas en la prestación del servicio notarial, en aquellos eventos en los que el daño proviene del ejercicio formal del particular que cumple funciones públicas, en este caso, el notario; Lo anterior, teniendo presente que el notario es el llamado a efectuar el reconocimiento de los otorgantes, o de las partes durante el trámite notarial; aunado a ello y en atención al fenómeno de la suplantación de identidad, se precisa que con el Decreto 019 del 2012 se inicia la implementación paulatina del cotejo biométrico para algunos trámites, en el cual se establece la interacción de la Registraduría para el reconocimiento biométrico; es decir que se utiliza un mecanismo tecnológico, como apoyo al formal conferido para establecer si, en efecto, la persona que comparece al trámite notarial es quien dice ser. En este orden de ideas, al existir en cabeza del notario una obligación clara, expresa y exigible, es claro que la responsabilidad por los daños que se causen por la omisión del cotejo biométrico, o por la suplantación de identidad, no puede recaer sobre la Superintendencia de Notariado y Registro, ya que esta no es el superior jerárquico o funcional del notario, ni la competente para dar fe pública de la legalidad de los otorgantes]"

Dada en la ciudad de Bogotá D.C, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

KAREN SOFIA TIJARO SANCHEZ
Secretaría Técnica del Comité de Conciliación
Superintendencia de Notariado y Registro